

Lejos de Cánovas

Santos Juliá, El País, 09/02/1997

Cuando el actual presidente de la Xunta de Galicia era vicepresidente y ministro de la Gobernación del primer Gobierno de la Monarquía restaurada, soñó que el destino le había llamado a crear un gran partido conservador disponiendo las cosas de tal manera que un gran partido liberal saltara también al terreno de juego. Dispuesto a materializar su ensoñación canovista, Fraga buscó afanosamente a su particular Sagasta entre los que se llamaban socialistas o socialdemócratas y recibió a Tierno, a García López y hasta a unos viejos prietistas residentes en México, Salazar y Salcedo. Finalmente, y dada la escasa entidad política de esos personajes, mantuvo una acalorada entrevista con un joven Felipe González, a quien prometió un futuro radiante: no tenía más que esperar unos diez años y el Gobierno sería suyo.

Repetir, un siglo después, el experimento de Cánovas estaba, desde luego, fuera de lugar. Fraga no tuvo en cuenta que un pacto entre élites políticas al estilo de la primera restauración monárquica sólo podía funcionar sobre la base de una sociedad desmovilizada, sin opinión pública. En esas condiciones, la alternancia pacífica de dos partidos en el ejercicio del poder era la única garantía de estabilidad del sistema político, carente del sustento vital, que sólo podía recibir de una opinión informada y movilizada. Pero la ensoñación canovista de Fraga tenía al menos un aspecto digno de atención: un sistema parlamentario no funciona si no hay un partido de oposición con idénticas posibilidades de alcanzar el Gobierno que el partido que temporalmente lo ostenta.

Los herederos por línea directa de Cánovas y de Fraga no comparten esta saludable doctrina y aplican a la oposición la misma receta que el segundo de ellos propugnó en alguna ocasión para los terroristas: la mejor oposición es la oposición muerta. Que Felipe González haya salido vivo y coleando de las últimas elecciones generales resulta insoportable a ese núcleo gobernante que se ha constituido en una especie de gabinete para la producción de crisis y que aparece integrado por el mismo presidente del Gobierno, su vicepresidente político y su portavoz mediático. Empeñados en no rebajar ni un milímetro la tensión, este trío de políticos permanentemente airados vive obsesionado por alejarse cuanto

antes de cualquier tentación canovista y machacar sin pérdida de tiempo a la oposición.

Y, puesto que los socialistas se han revelado electoralmente fuertes entre las clases que la derecha llama humildes, no hay más que mostrarlos como vendidos a las clases más poderosas para acabar con ellos. La estrategia que da sentido a las sucesivas batallas desencadenadas desde este gabinete de crisis incesante consiste en erosionar el suelo electoral del PSOE presentándolo en alianza con el gran capital y los monopolios. Es la vieja y gastada fórmula del populismo de derechas, que combina su sonrisa benefactora, con Arenas de gran cacique del PER, y su mueca agresiva, con Cascos en el papel de un salteador de caminos que no se concede descanso hasta quitar el fútbol a los ricos para repartirlo entre los pobres. Para que en ningún hogar falte el PER ni languidezca sin fútbol ningún televisor, el gabinete de crisis está dispuesto a lo que sea.

¿Es una estrategia disparatada? Está por ver. Las fórmulas populistas no siempre están condenadas al fracaso, pero a condición de cumplir dos requisitos: contar con un líder dotado del encanto seductor de la palabra y satisfacer las justas demandas de los humildes sin perder la benevolencia de los poderosos. Con un líder mudo -o que sólo queda bien cuando no habla- y con soliviantados presidentes de clubes de fútbol, no hay populismo que aguante. Lo mejor, en esas circunstancias, sería recuperar el genio de Cánovas y, sin sembrar para la oposición de rosas el camino, guardarse de la tentación de arrojarla por el precipicio, no vaya a ser que, del impulso, demos todos con la crisma en el fondo del abismo.

Tal como son

Santos Juliá, El País, 23/02/1997

A un político nunca se le conoce del todo hasta que llega al poder; lo que sea un partido es imposible saberlo hasta que alcanza el Gobierno. Parafraseando el célebre hallazgo de lord Acton, habría que decir: si el poder es absoluto, el político que alcanza el poder se corromperá absolutamente; si el Gobierno no se equilibra con otros poderes autónomos e independientes en su propio ámbito, el partido que lo ostenta cometerá abusos de poder. Esta es la gran lección del liberalismo: que "el poder ejercido por el hombre sobre su prójimo es siempre una usurpación"; que hay algo "diabólico, engañoso y vano" en el poder, como ha escrito admirablemente Francisco Ayala.

El nombramiento y la confirmación en su cargo del nuevo director general de RTVE es como el paradigma de lo que ocurre con los políticos cuando llegan al Gobierno y no existen barreras institucionales que limiten su poder. Ante todo, que el cargo de director general de RTVE sea de libre disposición de los políticos en el Gobierno debía constituir un escándalo en una sociedad que hubiera aprendido a distinguir lo público de lo gubernativo. Por ser pública, RTVE necesita con urgencia un estatuto de autonomía que sitúe a sus directivos y empleados al abrigo de las intromisiones directas del poder; de un filtro que impida que un cambio de Gobierno determine el nombre del obediente lector de los telediarios de las nueve.

Como eso no es así y RTVE, más que un ente público, es un instrumento de agitación y propaganda gubernamental, los políticos en la oposición se llenan la boca de grandes palabras para asegurar que con ellos, cuando lleguen al Gobierno, se garantizará su independencia y neutralidad. Promesas vanas que destrozan a la primera ocasión, aunque con ello aniquilen el valor de su propia palabra. ¿Quién podrá creer en adelante cualquier promesa del presidente del Gobierno por mucho que arrastre las eses y ahueque la voz al pronunciarlas? Fascinado como debe de sentirse ante la libertad absoluta que le confiere disponer de un poder discrecional, al interesado ni siquiera se le plantea esa impertinente cuestión. Nada importa tirar la propia palabra al cubo de los desperdicios con tal de mostrar en un acto de libérrima voluntad quién manda aquí. Eso es

el poder y quien no lo haya gustado no puede imaginar siquiera el placer que produce cambiar la cosa porque cambia el nombre de la cosa.

Es el placer que el poderoso siente al tachar la realidad si la realidad molesta. Por arte de birlibirloque, porque así lo decide el interesado, una sentencia de la Audiencia Nacional sin posible recurso de casación se convierte en un infundio propalado por sus adversarios políticos. Da igual que la sentencia sea pública, que los periódicos reproduzcan sus términos, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo haya declarado "al recurrente don Fernando López-Amor García incurso en una falta grave de abuso de autoridad en el ejercicio del cargo". ¿La sentencia? No existe; es sólo que el recurrente renunció a seguir recurriendo. ¿El abuso de autoridad? Una venganza del anterior secretario de Estado de Hacienda.

Negar la palabra dada, tachar los hechos realmente ocurridos, mentir, engañar al público, calumniar al adversario político: éste es el plus de competencia al que debe de referirse López-Amor para justificar su nombramiento y tildar de predemócratas a quienes le han puesto algún reparo. De una sola tacada, los políticos en el Gobierno se han desnudado del ropaje del interés general, del servicio público, de la neutralidad e imparcialidad y han aparecido tal como son: gentes dispuestas a premiar como mérito para el ejercicio de un cargo a quien demuestre haber cometido al menos un abuso de autoridad en su vida. Pues si el elegido "ha abusado de su posición sirviéndose de su cargo para fines no previstos por el Ordenamiento" y es premiado por ello, quien lo nombra lo tiene literalmente en sus manos; es todo suyo y está por entero a su servicio.

Uno de los nuestros

Santos Juliá, El País, 25/05/1997

Por tres y hasta por cuatro, cinco o seis veces, según se cuente, negó Álvarez Cascos a Amedo y Domínguez; no conozco a Amedo ni a Domínguez, dijo; y luego, tomando carrerilla, añadió: no me han llamado jamás Amedo y Domínguez, no he llamado jamás a Amedo y Domínguez, no me he encontrado casualmente jamás a Amedo y Domínguez, ni personal ni telefónicamente he tenido jamás el más mínimo contacto con Amedo y Domínguez, ni he nombrado a ningún intermediario ni he delegado en nadie ningún tipo de relación con Amedo y Domínguez. Con tanta negación y tantos jamases, parecía Cascos un san Pedro en su noche triste.

Conocida es la capacidad de los políticos para borrar de la existencia los hechos enojosos. Pero debían tacharlos con menos ahínco, pues tres negaciones seguidas, como todo el mundo sabe desde el tropiezo del fiel Pedro, equivalen a una afirmación. Quien de verdad no ha hecho algo no lo niega con tanto énfasis, no vaya luego a darse de bruces con la burlona mirada de la criada y caérsele encima los palos del sombrero. Algo de esto le ha ocurrido al vicepresidente del Gobierno, que, recobrada parcialmente la memoria, en lugar de derramar lágrimas de arrepentimiento invoca su agenda privada para negar al público información sobre lo tratado con los representantes de los dos famosos policías en el despacho de un director de periódico.

A la salvaguarda de la sacrosanta privacidad ha recurrido también, después de negar con idéntico énfasis haber amenazado jamás a nadie, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez. Eran, dice este *good fellow*, conversaciones privadas. Por supuesto, en privado y siempre que no procedan de un marido celoso o de un miembro de la mafia -dos especies que no acostumbran a amenazar en vano-, las bravuconadas pierden virulencia y hasta pueden tomarse como rasgos del carácter: son cosas de Rodríguez, ya sabes cómo es, dirán los amigos a modo de disculpa. Pero resulta que las cosas de Rodríguez se convierten en cuestión de Estado desde el mismo momento en que el Gobierno de la nación y cada uno de sus ministros se cree en el deber de expresar públicamente su solidaridad con un secretario de Estado en apuros. Díjolo Rodríguez y punto redondo.

Y esto es lo que no acaba de entenderse del singular enredo en que se ha metido pasito a paso el Gobierno. Pues Cascos y Rodríguez podrán hablar y amenazar en privado, pero el Gobierno bien que se apresura a manifestarles su solidaridad en público. Y, entonces, una de dos: o lo hablado y lo amenazado no es mera cuestión privada, sino de general interés y, por tanto, de obligado conocimiento; o lo es, y en tal caso el Gobierno, al mostrar tan solícito su apoyo, se convierte en garante de las agendas y conversaciones particulares de estos dos personajes. Lo que Cascos haya hablado en un despacho, lo que Rodríguez haya amenazado desde un teléfono, si en verdad fuese un asunto privado, sólo a ellos atañería y no habría por qué mostrar tanta solidaridad pública. Si el Gobierno se la brinda es porque cree que cuando uno de los suyos actúa no rige para ellos el principio de separación de lo público y lo privado en que se asienta la sociedad liberal.

Hay ocasiones en que una frase esgrimida para salir de un mal paso alumbra como un fogonazo toda la escena política. Cuando Cascos y Rodríguez recurren a la privacidad para evitar los focos, lo que hacen es retirarse de la polis como vulgares mafiosos y esconderse de las miradas del público para ir a refugiarse en un garito de impunidad; pero lo mismo ocurre cuando los ministros del Gobierno, uno tras otro, avalan lo dicho y lo actuado por estos señores repitiendo el escalofriante argumento de Luis de Grandes, portavoz del PP en el Congreso: "Verdad contra verdad, estamos con la verdad de uno de los nuestros". Uno de los nuestros, *good 'fellas'*... ¿No hemos visto hace poco una película de Martin Scorsese con tan evocador título?

Cínica desfachatez

Santos Juliá, El País, 07/09/1997

Los primeros observadores de los cambios introducidos en la política europea, a raíz de la Gran Guerra ya percibieron que la implantación del sufragio universal provocaba una radical transformación de los viejos partidos de notables en nuevos partidos de masa. Entre las novedades, una, fundamental, venía exigida por la ineludible necesidad de ganar elecciones para subsistir como partido y disponer por tanto de recursos económicos suficientes para afrontar las contiendas electorales con garantías de éxito. "Con menos de 20.000 marcos -escribía el siempre lúcido y desencantado Max Weber- no se puede conquistar en ningún caso un distrito electoral grande y muy disputado".

Así comenzaron a inflarse los presupuestos de los partidos políticos y así adquirió en la organización partidaria un nuevo y antes desconocido poder el funcionario encargado de recaudar fondos. Gentes muy variopintas fueron requeridas para aportar su contribución a las arcas de los partidos que, por su parte, montaron también empresas propias con objeto de acopiar los medios necesarios para afrontar los nuevos costes inherentes a la extensión del sufragio. Banqueros, constructores, industriales, comerciantes, los llamados hombres de negocios en general, fueron dejando caer en manos cada vez más ávidas su contribución mientras hacían la vista gorda si el recaudador sisaba para su provecho una parte alícuota del donativo o de la mordida.

Éste fue en sustancia el mecanismo que vino a sustituir la *old corruption* propia de la tradicional política oligárquica por la nueva corrupción propia de la moderna política de masa. La repulsa moralizante a la política como un ámbito de podredumbre, y a los políticos como individuos sin escrúpulos, que dicen una cosa y hacen otra, obsesionados sólo por el poder, adornados, como los envidiaba Ortega, "con el don de la mentira", tiene en estas prácticas de rapiña uno de sus más floridos campos de cultivo. Si en algo están de acuerdo intelectuales y taxistas es en la convicción, tantas veces compartida en medio del fenomenal atasco, de que todos los políticos son iguales; iguales, claro está, de abyectos.

¿Lo son? Un publicista resabiado respondería que no, que algunos tienen el cinismo más desarrollado que otros. Por ejemplo, Andrés Ollero, que arremete contra una sala del Tribunal Supremo por haber rechazado la personación del PP en el caso Filesa como acusación particular, y que proyecta una sombra de duda sobre la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial por haber concedido el amparo al juez atacado, ¿a qué juega? Erigido en debelador de la corrupción, Ollero no sólo atiza las brasas en que se consume Filesa sino que pretende además deslegitimar a un Tribunal por si el fallo fuera finalmente absolutorio de parte o de la totalidad de los procesados. Corrupto el PSOE por sus prácticas recaudatorias, corrupto el Tribunal por una cita con las comillas corridas, corrupto el Consejo por su origen espurio.

Pero ¿quién es este Ollero que así reparte lecciones de ética política? Pues ni más ni menos que un funcionario de un partido dedicado con idéntica fruición, y en tiempo no tan remoto como para haberlo olvidado, al mismo deporte que ha sentado en el banquillo a los acusados del caso Filesa; un partido que, por ejemplo, pasaba el platillo ante las fauces del "hombre de negocios" Javier de la Rosa. Con sólo contar en su haber la ignominiosa carta enviada por el pedigüeño Lacalle al dadivoso De la Rosa, Ollero y todo el partido al que pertenece quedarían ahora mucho más guapos si mantuvieran sus boquitas cerradas y dejaran a los jueces hacer su trabajo. Pues, en definitiva, lo que alimenta el argumento antipolítico de intelectuales y taxistas, o sea, del pueblo todo entero, no es tanto la corrupción como la cínica desfachatez de atacar a un oponente por los mismos delitos que los recaudadores del propio partido han cometido a mansalva.

La emergente telecracia

Santos Juliá, El País, 21/09/1997

Cuando vivía Franco, la cosa estaba clara y todo el mundo sabía a qué atenerse: la televisión pública era sencillamente una televisión gubernamental. Con el habitual descaro y la buena conciencia de los dictadores, Franco y su gente se reían a carcajadas de quien pretendiera establecer una mínima distinción entre lo estatal, lo gubernativo y lo público. Reforzaban así una tradición bien arraigada en los modos de gobierno españoles, desde la formación del Estado liberal: el ejecutivo es el único poder que cuenta.

Cambian los regímenes, pero las costumbres políticas se resisten a desaparecer. La televisión pública sigue siendo hoy, como desde los tiempos de su creación con Franco en la doble jefatura del Estado y del Gobierno, más gubernativa que pública. El Gobierno, por lo demás, no lo disimula: nombra a su director general de entre los más complacientes funcionarios de su partido y convierte los antiguos "partes" en actos de propaganda gubernativa bajo el eufemismo de telediarios o noticieros. El contrapeso al gubernamentalismo que podría venir de un consejo de administración independiente no existe; ya los partidos políticos se ocuparon de convertir ese consejo en brazo extendido del ejecutivo. De modo que, por ese lado, no hay por qué preocuparse: la televisión pública está, como desde los tiempos de Franco y sin interrupciones dignas de mención, en buenas manos, o sea, en manos del Gobierno.

Pero este Gobierno no se da por satisfecho con disponer de un instrumento tan dócil y eficaz como la televisión pública. Lo quiere todo. Presenciamos así la aparición de una forma típicamente española de ese ejercicio del poder, cotidiano y a distancia, que Javier Echeverría, en su lúcido ensayo *Telépolis*, llama telecracia. Lo original de la configuración española de esta nueva forma de poder es que aparece envuelta en un paquete en el que lo público/gubernativo se funde con lo privado/ex público bajo control del Gobierno y con un sector del poder financiero. Gobierno, Empresas ex públicas y Banca liderando operaciones de compra de cadenas de televisión constituyen algo diferente a un episodio de

una guerra entre empresas por el reparto de un succulento mercado; constituyen ni más ni menos que la emergencia de un nuevo poder con ansias totalizadoras y con recursos suficientes para dominar toda la mercancía televisiva que llegue a los últimos rincones de todas las unidades de consumo y producción de Telépolis. Pronto, encender un televisor equivaldrá a meter en la cocina los tentáculos de la nueva telecracia que con tanto tesón y no escasa habilidad construye día a día el Gobierno del Partido Popular.

Ya está éste con 1984 y el Gran Hermano, quizá piense alguien. Pues sí, algo tiene que ver todo esto con la necesidad compulsiva de amor que llevó a Big Brother a aparecer en todas las telepantallas de la ciudad utópica de Orwell. Esta ofensiva sobre los medios decretada desde el Gobierno, y conducida por Telefónica con los bancos Santander y Central Hispano cubriendo los flancos, tiene su origen en el sentimiento de desamor que tanto abrumba al presidente del Gobierno, palmo y medio más bajo que los gigantones del Norte. El presidente quiere que se le quiera y está dispuesto a comprar todas las televisiones hasta alcanzar el amor universal, gran sueño de todo aprendiz de déspota. Pero al resto de los españoles, a los que nos trae sin cuidado la altura de los suecos, nos va en el empeño mucho más de lo que la actual dejadez y como desinflamiento de la opinión permite vislumbrar: nos va que al final de la ofensiva, esta telecracia emergente acabe por instalarse en la sociedad española como poder mediático único y monolítico emitiendo un único y mismo mensaje -España va bien, o algo así- y que todos nosotros, como el desdichado Winston, con el vaso de ginebra en la mano y dos lagrimones resbalando por las mejillas, alcancemos la paz inefable convencidos de que por fin amamos al Gran Hermano.